

EL SICARIATO EN MEDELLIN: ENTRE LA VIOLENCIA POLITICA Y EL CRIMEN ORGANIZADO*

Carlos Miguel Ortiz Sarmiento **

Apenas ahora que, de una parte, se está desmontando la llamada "guerra con el narcotráfico", y que, de otro lado, estamos transitando hacia un régimen y una simbología política menos bipolares, empezamos a preocuparnos por entender el hecho del sicariato en sí mismo, y no solamente como pieza del engranaje del narcotráfico o como supuesta peonada de gobiernos o de grupos de "derecha".

La proliferación de sicarios y la institucionalización del sicariato, con sus atributos de prestigio, profesionalismo, funcionalidad, pasan por ser unos de los síndromes preocupantes de la coyuntura que atravesamos, uno de los graves factores de la inseguridad en las ciudades grandes de Colombia, y ya no exclusivamente en Medellín, en este momento: inseguridad que, sobre todo desde la época de los carros-bomba urbanos, se ha convertido en tema de desasosiego ciudadano, vapuleado por los "medios" y agitado como bandera de campaña política.

Los varios programas de recuperación de jóvenes en Medellín, bajo iniciativa oficial o privada, están ahí para confirmar esa priorización; así como las promesas gubernamentales de inversión social en los barrios de donde suele consi-

derarse provienen los jóvenes operarios del sicariato.

Sin embargo, el apremio por resolver en el término de la distancia un problema de coyuntura de las intrincadas características de éste, puede resultar contraproducente cuando no se tiene suficiente claridad acerca de los complejos procesos sociales que fueron tejiendo su urdimbre.

El término sicario alcanzó un uso generalizado y se incorporó al habla cotidiana de la violencia especialmente desde 1986, a raíz de los innumerables asesinatos de dirigentes y activistas de la Unión Patriótica y de organizaciones sindicales y cívicas contestatarias, y más aún con el exterminio de importantes figuras nacionales, del Estado y de la política.

A la connotación usual del castellano, de asesino a sueldo, los colombianos hemos adiconado al término en el lapso de apenas cinco años, una connotación de edad que ha llegado a serle esencial: el sicario es un joven o un adolescente. Aun más, por la fuerza de los hechos (puesto que los contratos para matar, en estos años, han puesto la mira efectivamente en esas edades), el término sicario sufrió entre nosotros una brusca evolución hasta significar hoy, ya no el asesino pago sino el asesino joven, así obre por propia cuenta e iniciativa en sus venganzas, rebusques o bravuconadas. Aquí nos referiremos al sicario, de preferencia, en la acepción de asesino joven a sueldo.

Los rasgos de "profesionalismo" bajo los cuales se conoce esta forma de actividad (reiterados

* Este artículo está inspirado, en su inicio, por el libro de testimonios de Alonso Salazar *No nacimos pa'semilla* (Ed. Cinep, Bogotá, 1990). Su lectura, que me transportó principalmente a los barrios periféricos nororientales de Medellín, sugirió una serie de reflexiones que fui cotejando con entrevistas a sicarios y jóvenes del lado noroccidental de la ciudad. En las entrevistas fue decisivo el trabajo de Carlos José Saldarriaga, asistente en un proyecto sobre la violencia en Antioquia que empiezo a desarrollar. A él mi reconocimiento.

** Sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

en las distintas entrevistas de los trabajos periodísticos conocidos), el mercado de oferta y demanda al que está sujeta, el predominio del frío móvil mercantil sobre otros móviles más pasionales de violencia, la relativa apoliticidad de los contratados aunque no de los contratantes ni de los actos violentos en sí que de allí resultan, todo esto exige que se estudie el fenómeno del sicariato como una modalidad surgida y consolidada dentro de un proceso social que es preciso desentrañar. En el trasfondo del proceso subyace la poca significancia del Estado de Derecho y, como corolario de la casi total descreencia hacia la justicia estatal, la gran aceptación de la justicia y venganza privadas o por propia mano.

Desde el punto de vista del tipo de actores sociales a los que pertenecen los agentes intelectuales de esta forma de violencia, ellos pueden ser compartidos hasta cierto punto por otras formas organizativas violentas (grupos paramilitares o de autodefensa); hablamos de actores sociales del siguiente tenor: narcotraficantes, gentes de negocio amenazadas por el secuestro o por riesgos económicos (ganaderos, bananeros), políticos amenazados electoralmente, oficiales militares, de policía y de seguridad, en servicio activo o en retiro, y—más frecuentemente— grupos de éstos combinados.

Sobra destacar las ventajas que la modalidad del sicariato representa para tales usurios, cuando la tarea de exterminio se asume en medios urbanos y especialmente contra blancos custodiados por autoridades oficiales, y no como parte de las guerras territoriales que se libran en vastas extensiones rurales; pues en este segundo caso siguen prevaleciendo los clásicos cuerpos armados de un signo o de otro, quienes usufructúan una debilidad del Estado que no es sólo la de sus relaciones estructurales sino a veces su propia inexistencia física, pudiendo entonces los guerreros (guerrillas o paramilitares) contar con el cordón de seguridad de la población campesina circundante que los protege.

En los cascos urbanos las condiciones son diferentes; ya desde los años 50 los funcionarios oficiales y sus opositores, habían valorado la utilidad de los contratos evanescentes con ase-

sinos a sueldo para eliminar contrincantes; así lo atestiguó el auge de los “pájaros” y “paviadores”.

En lo que concierne a la actividad sicarial de hoy, no existen los caracteres que, a nuestro modo de ver, definen al guerrero de tiempo completo, tanto el alzado en armas contra el régimen como el paramilitar, a saber: dedicación total y vocacional al oficio de la guerra, y cohesión política e ideológica (en el caso de los paramilitares, nutrida por la concepción “anticomunista” de factura norteamericana); para garantizar estos dos atributos, a semejanza de la guerrilla los paramilitares diseñaron sus cursos de preparación y conformaron sus escuelas, por ejemplo las que señaló el informe del Director del DAS al Presidente Barco en 1989¹.

En el sicariato, en cambio, agente intelectual y agente material no están necesariamente unidos por el mismo cordón, y los lazos que los ligan no son primordialmente los de la lealtad política ni la participación de los objetivos provenientes de la adhesión a un determinado proyecto de guerra; sino más bien los lazos de la compraventa, la ideología del intercambio de mercancías, aunque, si se trata del sicariato al servicio del narcotráfico, especialmente en los cuadros de mayor confianza de los capos, puedan haberse anudado entre aquéllos y éstos ciertos vínculos de lealtad, más personal que política.

En el sicariato existe a menudo disrupción de fines entre el agente intelectual y los agentes materiales. No se requieren afinidades ideológicas entre uno y otros. Por eso un mismo sujeto puede ser agente material de los actos violentos de signo político contrario. Por eso en el sicariato, más que en cualquiera otra forma, se estrechu la violencia política con las otras violencias, las no políticas. Y por eso la misma

1. Según el informe, que en principio era confidencial pero se filtró a los medios de comunicación, la principal de dichas escuelas era la “081” de Puerto Boyacá, en la cual impartieron instrucción varios asesores extranjeros y la cual contó con el aval del coronel comandante y miembros del Batallón Bárbara. El informe revela otros vínculos más de oficiales del Ejército con grupos y escuelas de paramilitares. Parte de ese informe fue publicado en el diario *El Tiempo* del 10 de abril de 1989.

forma, sicarial, aun más, el mismo sujeto, puede utilizarse aquí para fines políticos, allí para un simple ajuste de cuentas.

Una nota característica que la violencia sicarial sí comparte con la violencia de guerrillas y de paramilitares, es la mediación de lo organizacional entre el sujeto y su acto, de modo tal que el acto violento, ni en un caso ni en el otro pueda reducirse al simple juego de estímulo-respuesta, frustración-agresión, desespero-supervivencia, instinto-ataque. Por lo mismo, ningún tipo de explicación proveniente de la psicología de los individuos es suficiente para dar cuenta de este género de violencia "organizada". Entre cualquiera de los anteriores términos bipolares siempre está mediando, en ese tipo de violencia, la organización: con sus elementos de cálculo, división del trabajo, jerarquías, fragmentación de tareas, recursos técnicos, capital, separación entre fines del empresario y fines del operario.

Ahora bien, hay que explicar las condiciones que llevan, desde el punto de vista de los empresarios de violencia, a la proliferación e institucionalización de este género de empresas y a su consecuente demanda de mano de obra para ellas, en unos lugares más que en otros; y explicar así mismo las condiciones que llevan a la institucionalización del tipo de "coloca", "rebusque" o "empleo" y a la expansión de la oferta, desde el punto de vista de los operarios o agentes materiales.

Hay que explicar, obviamente, las condiciones para el encuentro de oferta y demanda, las que —especialmente favorables en algunos medios urbanos— hicieron florecer las empresas del llamado "crimen organizado"².

Entender esas condiciones es el reto para las varias ciencias sociales que aspiren a esclare-

cer la coyuntura: condiciones que moran en la sociedad misma, cuyo proceso habría hecho germinar y expandir el recurso al sicario.

Pues bien, más allá del material etnográfico y descriptivo, como el recogido y organizado con tanto acierto por Alonso Salazar en su libro *No nacimos pa' semilla*, es preciso constatar que el tratamiento analítico del fenómeno está apenas en proceso y no disponemos aún de resultados concluyentes³. Aquí, lo único que haremos es suscitar la discusión en torno a algunas consideraciones previas para un estudio sociológico o sociohistórico.

Dividiremos este ligero preludio en dos partes, a saber: el proceso visto desde el ángulo de los autores intelectuales o contratantes, y el proceso visto desde el ángulo de la oferta de sicarios dispuestos a ejecutar los contratos de muerte por un estipendio. Empezaremos por la segunda.

I. EL ITINERARIO DESDE LOS EJECUTORES DEL SICARIATO: DE "MALOSO" A SICARIO

Trátese de este tipo de agentes o de cualquier otro, antes de rastrear el itinerario de los procesos sociales que los generan, lo primero es preguntarse por la naturaleza misma del tejido social envolvente: del grande conglomerado urbano, y de las unidades más próximas de vecindario y socialización, a saber el barrio y la comuna.

Salta a la vista, sí, que una caracterización simplemente económica de los barrios en los términos convencionales de bajísimos ingresos, desempleo formal, insuficiencia alimentaria, misera vivienda, colas para abastos esenciales, transporte escaso y penoso, ínfimos y tardíos servicios del Estado, se queda corta frente a preguntas como la génesis o la significación del sicariato. Empezando porque esa lista de indi-

2. Como en los demás negocios, en éste también llegó a institucionalizarse un espacio de encuentro entre oferta y demanda, que, en Medellín donde el rodaje ha sido más conocido, se llamó *las oficinas*. Normalmente *las oficinas* funcionan bajo la fachada de elegantes establecimientos comerciales legales, ubicados en distintos sitios de la ciudad pero especialmente en barrios de tradición burguesa, y reciben permanentemente hojas de vida de numerosos jóvenes que aspiran, como la gran oportunidad de su vida, a ser seleccionados.

3. Otras publicaciones de carácter etnográfico relacionadas con la problemática, son el libro de Víctor Gaviria *El pelaito que no duró nada* (Ed. Planeta, Bogotá, 1991) y los artículos de Silvia Dussán sobre bandas juveniles de Santa Fe de Bogotá. En material filmico, *Rodrigo D* de Víctor Gaviria y *Sobrevivir en Medellín* de Alonso Salazar.

cadores, lejos de mostrar constantes, varía bastante de un barrio a otro de los que, en común, pasan por ser habitat de los jóvenes ofrecidos a este mercado letal.

En el caso de Medellín metropolitano, unos de esos barrios (Aranjuez, Manrique, Barrio Obrero de Bello) son relativamente antiguos, construidos en los años 1920 y 1930, originalmente destinados a vivienda obrera aunque después modificados en su composición por la afluencia desde otros barrios pobres de la ciudad y por la incesante migración de los campos y pueblos de Antioquia; son barrios clasificados actualmente por la Oficina de Planeación en el 3o. de los 6 estratos económicos, con un trazo relativamente ordenado y satisfactoria cobertura actual de servicios públicos.

Es justamente en este primer tipo de barrios, los de estrato intermedio de la zona nororiental de Medellín y los de Bello, en donde primero se consolidaron aquéllas de las bandas que fueron más famosas y estuvieron vinculadas al cartel de Medellín: Los Prisco en Aranjuez y La Ramada, en barrios de Bello. En otras palabras, fue en ese primer tipo de barrios donde pelecharon los sicarios más profesionales, aquéllos que responden mejor al prototipo establecido: asesinos a contrato, no simples rebuscadores por cuenta propia; relacionados con "oficinas" ligadas al narcotráfico; pertenencia a grupo con las connotaciones de "banda", no de simple "gallada" o "barra"⁴; y alta organización, en materia de recursos, conexiones políticas, calidad de armamento.

En los barrios de los estratos económicos inferiores, también hubo bandas importantes ligadas al narcotráfico (Los Nachos), pero habría proliferado más, de una parte el sicario por propia cuenta, cuya aspiración a vincularse con los "duros" y las bandas grandes siempre estaría latente; de otra parte, los jóvenes atraídos artesanales y ladronzuelos, de las

mismas edades juveniles que los sicarios, más próximos a la forma de delincuencia urbana tradicional, a quienes los sicarios profesionales llaman despectivamente "chichipatos", muchas veces persiguiéndolos y eliminándolos.

Finalmente existen en Medellín, al noroccidente, unos barrios conformados por autoconstrucción sobre lotes comprados a urbanizadores, a partir de los años 50; hoy día son barrios intermedios, del estrato 3; aunque el sicariato que se da allí es menos publicitado, no podemos desconocerlo; el más grande de esos barrios es Castilla, en donde crecieron "La Quica" y "Taison", muy conocidos como elementos importantes de la parte militar del cártel de Medellín.

Del vistazo a brocha gorda que acabamos de dar, se puede colegir que los jóvenes sicarios provienen de barrios con características socioeconómicas disímiles, donde, por otra parte, no sólo se desarrolla la violencia sino también, en contracorriente, las solidaridades y la cultura de la vida, como, con razón, replican sus habitantes al sentirse masivamente discriminados.

En el plano de las estadísticas de estratificación social, o en torno a categorías como pobreza, hambre, clase social, poca cosa podremos obtener para entender el sicariato. Pero mucho tal vez si consideramos otras dimensiones sociales que recubren los diversos tipos de barrios nombrados, por encima de sus disimilitudes: las transmutaciones internas, por ejemplo, acarreadas por las migraciones; los problemas de la apropiación del espacio privado y el espacio público, el peso de la calle, la cuadra, la "gallada" en los procesos de socialización, frente al peso del hogar o de la escuela en barrios de estratos altos; cómo ve el norte de Medellín a la otra parte de la ciudad, cómo ve a la ciudad en conjunto y a la institucionalidad que supuestamente la regula, a su vez los otros cómo los ven a ellos y cómo sienten ellos que los otros los ven.

No es difícil adivinar a partir de estos interrogantes la importancia de lo cultural, que es el primer aspecto del itinerario que vamos a rastrear, con la mira puesta en el sicariato como punto de llegada. Veámoslo:

4. En el trabajo sistemático de análisis que en este momento adelanta Alonso Salazar y que próximamente será publicado, él desarrolla una diferenciación entre "gallada" y "banda" como etapas sucesivas de evolución. También sobre este tema acaba de aparecer el libro de Diego A. Bedoya Marín y Julio Jaramillo Martínez, titulado *De la barra a la banda* (Ed. El propio bolsillo, Medellín, 1991).

1. Existen en el medio unos elementos culturales (creencias, representaciones, principios, lenguajes, lazos afectivos familiares y grupales), que, aparte de nutrir la violencia y al tiempo con ello, han alimentado otras acciones de muy distinto sentido, algunas de las cuales, v.gr. la colonización, suelen ser evocadas como "gestas"; se trata de elementos culturales transmitidos de generación en generación y desde los colectivos a los individuos (aunque no en forma lineal sino a manera de circuitos de doble vía), a través de los procesos de socialización.

Por ejemplo el valor supremo de la "guerra" y el guerrero, valor por esencia masculino aunque a veces atribuible a la madre del "varón" reforzando a su carácter atávico —generacional—. En las entrevistas del citado libro de Alonso Salazar, un joven sicario dice:

—Nosotros no queremos paz, lo que queremos es guerra—, les contestó Lunar, que era el antiguo comandante y soltó una ráfaga al aire (...) De ahí siguió una guerra sangrienta, ellos bajaban, nosotros subíamos, nos hacían emboscadas... Una guerra la hijueputa que dejó una cantidad de muertos de lado y lado (...) Hay que reconocer que ese man era un guerrero (...) Con la policía también guerriamos, pero con ellos la cosa es más fácil, porque suben cagados del miedo, y uno conoce su terreno⁵.

Valores culturales como éste de la guerra, que, con sus afines, multívocos de maldad justiciera, de "verraquera" u "hombría", "machera", se combina, sobre todo en la zona de influencia paisa, con el valor de la "viveza", aparecen históricamente condicionados en su forma de expresión según las coyunturas y períodos. Así, la "verraquera" está asociada en los abuelos de estos jóvenes (generalmente campesinos o pueblerinos) a la pelea liberal-conservadora de La Violencia de los 50, hoy vista sin sentido por los jóvenes, como si la espiral actual tuviera, ella sí, sentido; en la generación siguiente, de inmigrantes a la ciudad expulsados por la violencia, esa "verraquera" (personificada en la madre que hace también las veces de padre) ha podido expresarse en luchas más o menos clásicas, caso de las invasiones que desafiaron la

autoridad en barrios de colonización reciente, como los Barrios Popular 1 y 2⁶.

En la tercera generación, a la que pertenecen los jóvenes sicarios, la "verraquera" toma otros rumbos bastante diferentes, caracterizados especialmente por el cruce explosivo de estos circuitos de rancios valores con los signos provenientes de la sociedad del consumo, del espectáculo y de la publicidad audiovisual del momento (Rambos mortíferos, salsa "gozona", motos y modas). Ya aquí no hay cabida para la expresión de tipo contestatario de la anterior generación, ni siquiera casi en los términos del Punk⁷; desde un punto de vista, porque muchos de los bienes por los cuales lucharon los padres ya cambiaron de sentido para los hijos al serles dados de nacimiento y parecerles, por tanto, banales y "naturales"; desde otro punto de vista porque, aun desde las honduras de precariedad y marginalidad de muchos de los barrios que habitan, se levantan, absorbentes, las traumáticas fantasías de esta sociedad moderna, sueños que moldean aspiraciones que no fueron igualmente intensas en los años 60 y 70.

No obstante, lo que, a partir del habla cotidiana, hemos descriptivamente llamado "verraquera" y "viveza" ("no dejársela montar" y "saber tumbar"), es ciertamente una mezcla explosiva, pero no peculiar del actual momento; ella ha impulsado, efectivamente, muchos episodios de la vida nacional, entre ellos la gigantesca —y violenta— empresa de la colonización, todavía hoy en marcha. Por eso convergen elementos característicos de los barrios de Medellín, como los traídos a cuenta por el citado Alonso Salazar, y elementos propios de una realidad tan aparentemente distante de aquélla, como sería la colonización de la lejana Orinoquia: lo que Jorge Orlando Melo, al prologar el libro de Alfredo Molano *Aguas arriba*⁸, denomina con acierto el "capitalismo salvaje", que está metido hondo en el alma del más pobre colono como en la de los comerciantes mayoristas de oro o en la de los

6. Cfr. O.c., ps. 39-40.

7. El sicario no es generalmente un punkero, reitera Alonso Salazar en la O.c., es más bien un gozón salsero.

8. Alfredo Molano, *Aguas arriba, entre la coca y el oro*, El Ancora Eds., Bogotá, 1990.

5. En Alonso Salazar, O.c., ps. 48-49.

comerciantes citadinos compradores de coca, cadena que llega hasta las multinacionales que en la Orinoquia explotaban el caucho y el pendare.

Sobra repetir que ese mundo de las motivaciones, las aspiraciones y las preferencias, que hemos llamado de algún modo las condiciones culturales en las que surge el sicariato, no puede simplificarse reduciéndolo a explicaciones como la pobreza, el hambre, el desempleo o —en términos más abstractos— la estructura económica. Es ante todo un problema de signos, de significaciones.

La búsqueda del dinero que motiva al joven sicario, bien puede dirigirse a satisfacer necesidades personales y familiares de supervivencia, como a satisfacer necesidades de gusto suntuario, en parte creadas por la sociedad de consumo y en parte exigidas por su espíritu de gozón⁹.

Por sobre todo es importante el modo de conseguir el dinero buscado; pues es claro que, aun en el supuesto de que sea imposible conseguirlo mediante el trabajo formal, podría obtenerse en actividades de la economía informal, en la reventa de objetos robados o incluso mediante hurto simple, como lo observan Camacho y Guzmán en su estudio sobre la violencia en Cali¹⁰. Pero no: más allá de lo económico, el modo de recabar el dinero deseado es tan importante como el dinero mismo; ha de ser un modo que reafirme los valores de los cuales hemos hablado, que merezca que la gente aspire a él, y una vez "coronada" la acción para obtenerlo, él mismo se convierta en símbolo de esos valores.

En la colonización de principios de siglo, fueron también empuje los valores de hombría, viveza, riesgo, pero los bienes que los simbolizaban cual trofeo o botín, tuvieron históricamente otras expresiones. Aquel colonizador media su verraquera y su viveza por las hectáreas de café que lograra habilitar y por el derroche en alco-

hol, prostíbulos y juegos de azar; el joven sicario de hoy mide la verraquera y la viveza "coronadas", si es principiante, por las zapatillas Reebok, chaqueta de cuero y juerga de discoteca pagadas con el dinero del primer atraco, o la poderosa "Honda" producto de acciones de mayor osadía.

Para este joven, haya o no haya empleo, el dinero fruto del diario laborar de un asalariado, a más de ser insuficiente es obtenido de manera despreciable. Lo que cuenta para él es el "dinero fácil" (par de términos muy reiterados en el habla cotidiana de sicarios y de jóvenes). Lo llaman "fácil", no porque esté exento de riesgo, no por oposición al valor de la guerra, todo lo contrario; sino en rechazo a la destrucción negativa, a la ascensión de la rutina, el cumplimiento, la paciencia, la inmovilidad social, la resignación, que perciben como antivalores.

Es de este último modo, grotesco, como obtienen la diaria subsistencia sus padres o padres-tros, quienes por eso mismo resultan colocados en inferioridad respecto de los hijos ante el hogar y ante la madre (lo que ha dado pie para una lectura freudiana, que, a decir verdad, es válida para muchas otras circunstancias y no alcanza a explicar por sí sola el sicariato).

En boca de muchos jóvenes de los medios barriales de Medellín o de cualquier ciudad donde han granado los sicarios, podría ponerse la frase de uno de los personajes centrales del filme de Martin Scorsese "Buenos Muchachos": "Para nosotros, esa gente buenaza con salarios de mierda, estaba muerta". Como se ve, tampoco nos hallamos aquí ante comportamientos exclusivos del sicario de Medellín o del sicario colombiano, sino que en ellos hay bastante de común con el mundo del hampa y de las mafias de otras latitudes. Quizá más bien el punto sea en qué grado aquí esos códigos siguen siendo de grupos minoritarios o se han extendido y generalizado a grupos enteros generacionales, o a capas económicas, o a barrios, o a toda la ciudad: pregunta que bordearemos en los puntos 2 y 3 de este "itinario".

2. Estando de por medio los valores, creencias, preferencias, en fin significaciones, que hemos llamado el mundo de "lo cultural", existieron en

9. "No todos tienen necesidad, algunos entucan por la familia, pero otros es por mantenerse bien, con lujo"; dice uno de los jóvenes entrevistados por Alonso Salazar, en *O.c.*, p. 27.

10. Cfr. Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, *Colombia ciudad y violencia*, Eds. Foro Nacional, Bogotá, 1990, p. 92.

los barrios, desde tiempo atrás, formas primeras de violencia, relativamente artesanales: en parte ligadas a los valores mismos y en parte su contrahaz; en ellas los recursos utilizados eran todavía elementales y poco costosos, más aún tratándose de la delincuencia juvenil; los muchachos "malosos" del barrio no pasaban de armas blancas o, a lo sumo, de las formas más rudimentarias de armas de fuego como el trabuco de confección doméstica. Hasta cuando irrumpen en el barrio, procedentes del exterior, *organizaciones*: con recursos, capital y tecnificación.

Antes la figura arquetípica de la violencia barrial en Medellín era la del "malevo", el "camaján" en los años 60, que se asociaba a un adulto y no a un menor, ese "malevo" evocado en el folclor —como anota Víctor Manuel Villa— desde el tango ("Sangre maleva") hasta la salsa de Pedro Navajas¹¹.

Las organizaciones con las cuales, a nuestro juicio, se inaugura otra fase de la violencia urbana, donde el protagonismo pasaría a los jóvenes y adolescentes, fueron de dos tipos principalmente: aquéllas que utilizaban la violencia con una intencionalidad política representada como "revolucionaria" (y presuntamente "a nombre" del pueblo), que a su turno restringía a esos fines el uso de la fuerza, y aquéllas que utilizaban la violencia, con menos restricciones, como mecanismos regulares de funcionamiento de sus negocios privados ilegales, en un comienzo sobre todo para fines de ajustes internos de cuentas e intimidación de jueces. Los primeros, más institucionales; los segundos, más informales y con mayor peso de los lazos de parentesco y amistad.

Fue también importante en los barrios un tercer tipo de organización, de contornos ambivalentes en relación con la violencia; se trata de los entes del Estado, particularmente de sus cuerpos armados y de seguridad; pero no hablamos de ellos ahora porque serán materia del punto 3.

Un período crucial en la presencia de los dos actores, narcotráfico y guerrilla, es el posterior a 1984; 1984 fue el año de inflexión de las políticas oficiales tanto con respecto a la guerrilla como al narcotráfico, y a la vez marcó el viraje de las relaciones de los dos con el Estado y —por qué no— con el resto de la sociedad.

Sobra insistir en el atractivo ejercido hacia las juventudes, particularmente de capas bajas y medias, por estos dos tipos de organizaciones, la del narcotráfico ante todo. Los valores y aspiraciones de estos jóvenes, el dinero fácil, y esa simbología surgida del cortocircuito entre lo ancestral y lo moderno, entre la necesidad y la opulencia, los representaban, cual ninguno otro, los comerciantes ilegales de psicotrópicos, cuyo súbito enriquecimiento y ascenso social eran un ejemplo viviente de hasta donde podían llegar ellos mismos.

Los guerrilleros también fueron oídos y seguidos pero con mayores reservas: los jóvenes se interesaron mucho en los entrenamientos bélicos como "milicianos" en los campamentos, menos en la educación o adoctrinamiento político; su mundo cultural les impedía entusiasmarse por banderas otras que las de sus intereses atomizados por el "capitalismo salvaje"; eran menos propensos que sus padres a pensar y actuar en términos de clase social. Les parecía "carrasca" el discurso político de los guerrilleros y por ello casi todos les abandonaban una vez recibido su muy esperado entrenamiento militar, dedicándose "de viveza" a utilizar esos conocimientos para conseguir dinero¹².

Obviamente hubo mayor o menor influjo de cada uno de los dos tipos de organizaciones nombradas, según los barrios; por lo regular, las guerrillas, cuya presencia fue más efímera, levantaron sus campamentos de "milicianos" en los barrios periféricos nororientales, los más

12. "... Pero a la mayoría de los pelados no les sonaba tanto la carreta de la política, les tramaba más que todo lo militar" (En Alonso Salazar, O.c., p. 86). "Yo estuve un tiempo en grupos de esos. Nos pasábamos en reuniones hablando del imperialismo, de la burguesía, de la explotación, de la lucha de clases... mucha carrasca, pero no nos compenetrábamos con la realidad. Entonces decidí que era mejor gastarme el tiempo, como lo hacía antes, tomándome unos chorritos con una pelada los sábados por la tarde, y no volví a la reunión" (*Ibid.*, pág. 94).

11. Víctor Manuel Villa, "Deja que aspiren mis hijos", Universidad de Antioquia, Medellín, 1989.

pobres y en vías aún de colonización (varios de los cuales viven hoy un nuevo tipo de violencia, la de las "Milicias Populares"); mientras que las bandas apadrinadas y financiadas por los capos del narcotráfico, como ya vimos, operaron mayormente desde barrios antiguos y consolidados, de estrato económico popular pero menos bajo.

Hasta aquí hemos hablado del impacto de la presencia de organizaciones poderosas en los barrios, especialmente del narcotráfico, a partir de efectos vistosos, incluso cuantificables: cambios en el tipo y calidad de las armas, introducción de motos y autos, circulación de dinero en montos considerables, incremento de porcentaje de participación de jóvenes, y hasta cambios en el atuendo personal, las maneras y el lenguaje de los operarios de la violencia, con relación a los decenios precedentes. Pero existe un efecto quizá más importante —y menos perceptible— de este factor organizacional: es el cambio producido, en el medio social, sobre la representación del "matar al otro", cambio que deviene determinante para la generalización del homicidio como recurso ordinario de cualquier tipo de propósito (también del político, entre muchos otros).

Distinguiendo, bajo un ángulo estructuralista, entre el núcleo duro de una representación y sus esquemas periféricos, podemos visualizar así ese importante cambio: antes de la irrupción de las organizaciones poderosas, de cualquiera de los tres tipos indicados, el núcleo "no nos podemos matar unos a otros", o, de otra manera, "no se puede matar al otro", persistía protegido, ante el hecho de cada asesinato, gracias a racionalizaciones del siguiente tenor que actuaban como contrafuertes para mantener incólume el núcleo: "el que mataron (o el que maté) era malo, era un terrateniente explotador", o "se mataron allá entre ellos, son malos y no les importa la moral", o "si lo mataron, algo debía", o "es que no han matado (no he matado) un varón (un alguien), sino un simple faltón". Mas las prácticas de homicidio se volvieron muy reiterativas, en los últimos años, a la vez que se fue diluyendo la bipolaridad (buenos y malos) que sostenía los esquemas periféricos de racionalización al converger en el mismo escenario más de dos organizaciones, con promiscuidad, además, entre ellas. Fueron

entonces resquebrajándose los esquemas racionalizadores hasta que el núcleo de la representación, desprotegido, él mismo cedió; y así ha llegado a cambiarse la representación de la muerte del otro, lo que se palpa hoy en las expresiones de los sicarios, o aun de muchos jóvenes que todavía no han cometido homicidios: "matar es una acción como cualquiera otra"; o "mi oficio de matar por encargo es una profesión como cualquiera otra".

Ese proceso es lo que llamamos el cambio de la representación social del "matar al otro", por efecto de la intervención de organizaciones poderosas, sobre la violencia tradicional.

3. El tercer momento del itinerario hacia el sicariato corresponde a la forma de participación o de ausencia de las entidades del Estado, es decir, las condiciones institucionales de la violencia.

Frente a esos procesos, el Estado ha sido ausente estrictamente como Estado de Derecho: he aquí las condiciones institucionales. Sus agentes han actuado, pero más allá de su investidura para defenderlo, han intervenido frente a los poderes privados en el mismo lenguaje de éstos, como un poder privado más: a veces de manera autoritaria, la ley soy yo¹³, y, más frecuentemente, de manera transaccional, permanentemente negociada, siendo cómplices de los hechos delictivos o incluso ejecutando hechos tales de su propia mano.

Todos los días pasaban historias parecidas y la ley sin funcionar. Generalmente no subían, otras veces cogían los bandidos y a la media hora estaban otra vez en el barrio. Se salían con billete y llegaban a cobrársela a la gente que los había denunciado. También se llegó a dar el caso de que los polochos trabajaban en asocio con las bandas, se veían patrullas de la policía surtiendo los jibariaderos o cobrando vacuna. La propia policía les vendía armas y municiones¹⁴.

Los vínculos con la institucionalidad han sido siempre y en todas partes un factor importante para la prosperidad del crimen organizado. Basta recordar en la primera parte de "El

13. "Usted no es la ley vieja hijueputa, la ley somos nosotros y sabemos lo que hacemos —me gritó uno de ellos mientras me apuntaba con la carabina". En Alonso Salazar, O.c., p. 39.

14. *Ibid.*, ps. 89-90.

Padrino" lo que los "jefes de familia" de la mafia reunidos le expresan a don Vito Corleone: Lo necesitamos a usted que tiene las conexiones, que mantiene a los políticos en el bolsillo como calderilla.

Este hecho universal adquiere, sin embargo, una dimensión y fisonomía especial en una sociedad, como la nuestra, en la cual la juridicidad del poder se ha caracterizado históricamente por su precariedad, el Estado de Derecho por su endeblez y falta de arraigo cultural, el poder público por su disolución entre la interminable fragmentación de los poderes privados.

El resultado es entonces que lo institucional no sólo interviene como llave de paso del engranaje, sino que es invadido por los actores de violencia en pugna, a tal grado que los agentes estatales quedan atrapados en el piélagos, sucionados por otros poderes o convertidos en un poder fragmentado más o sucumben al juego ambivalente de lo uno y lo otro.

De este modo el Estado termina siendo, con los otros dos tipos de organizaciones, un factor también decisivo en el paso de la violencia artesanal a la violencia organizada, y en la generalización del homicidio como recurso, realidades que hacen parte de la consolidación de la forma sicarial de violencia.

Podría hablarse aquí de la inacción de la justicia como factor de impunidad, de la veleidad o el temor de muchos jueces ante los distintos actores de violencia, del clientelismo y la corrupción administrativa como propiciadores de la falta de credibilidad de las instituciones, etc. etc. Pero refirámonos sólo a los entes que, dentro del conjunto del Estado, muestran una relación más directa con el itinerario social conducente al sicariato, a saber: los cuerpos armados y de seguridad.

¿De qué maneras concretas se ha traducido la participación de los cuerpos armados y de seguridad del Estado en el proceso? Veámoslo, aunque sea en forma serial y apenas enunciativa:

a) Con la práctica tan extendida de violación de derechos humanos durante el período con-

siderado (desde 1984 hasta hoy), los cuerpos armados oficiales han propiciado, tanto entre quienes ejecutan las violaciones, como entre quienes los apoyan a ellos y entre quienes los atacan, una percepción de que las normas del Derecho son falaces, inefectivas e inútiles, y que el poder se define por fuera de la juridicidad, por las vías de fuerza y de hecho: lo cual equivale a destruir desde sus cimientos el anclaje de un régimen democrático. Son muy dicientes las palabras del sicario entrevistado por Alonso Salazar: "Vemos la policía como una banda más, con licencia para matar".

Para sustentar la afirmación que sindica a agentes estatales de violaciones, sobran los documentos; bastaría repasar informes como los de Americas Watch, el Informe de Procuraduría de 1991, el informe aun más reciente de la propia Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (no disponible en el momento), por hablar sólo de los que no han sido objetados desde el Gobierno.

b) El uso recurrente del asesinato, que practican los agentes oficiales, en muy diferentes direcciones y contra muy diversos tipos de "enemigos", ha contribuido enormemente en el medio social a la evolución de la representación del "matar a otro" y al esparcimiento del homicidio como recurso banal, aspectos que refuerzan también el sicariato.

Muchos de los jóvenes hoy vinculados de tiempo completo o esporádicamente al sicariato, fueron soldados, y muchos de ellos cometieron su primer homicidio dentro del servicio activo, más que todo aquéllos que, por su desparpajo y antecedentes "malosos" eran destinados a labores de "inteligencia" en zonas de enfrentamiento guerrillero como Urabá, Magdalena Medio, nordeste antioqueño, Bajo Cauca.

Así como varias guerrillas, desde 1984, fueron muy ligeras en el reclutamiento de jóvenes y niños de los barrios pobres, que entraban y salían de la organización sin mayor tiempo para su formación política, así también el Ejército ha sido negligente en la selección y en los controles del personal que destina a esa clase de labores en zonas candentes.

c) La imbricación de numerosos agentes policiales en actividades delictivas de diverso tipo, los arreglos con sicarios, con narcotraficantes, con otros delincuentes, sea a manera de sociedad ("parceros"), de transacción ("cruces"), de alquiler de armas, de tributación ("vacunas"), de "mordida" o de chantaje.

II. EL ITINERARIO DESDE LOS USUARIOS DEL SICARIATO: DEL RECURSO AL PISTOLOCO HASTA LOS CARROS-BOMBA

Al hablar de usuarios del sicariato, no se está necesariamente hablando sólo de los empresarios del "crimen organizado", de los promotores o financiadores permanentes de sicarios, sino, en un sentido más amplio, de todo aquél que, ocasional o permanentemente, recurre a un sicario para eliminar a otro. Pero claro está que los usuarios más conocidos y sobre los cuales existe más información, son aquéllos que sistemáticamente se han convertido en patrocinadores de sicarios y, entre ellos, particularmente los narcotraficantes; lo cual no debe hacernos ignorar que también otros hombres de los negocios o de la política, y oficiales, activos o en retiro, de los cuerpos armados, han acudido a veces a este sistema para saldar sus cuentas y ejecutar retaliaciones. En regiones como el Cauca, Córdoba o Sucre, parece que los hacendados ganaderos venían apelando a esta forma de violencia desde los años 60, las más de las veces para liquidar o intimidar a los campesinos o indígenas que se movilizaban contra ellos en reclamo de lo que consideraban sus derechos.

Pero indudablemente la proliferación abierta de esta forma de dirimir conflictos y su institucionalización, se debe a la creciente utilización de ella como parte de la actividad en auge del narcotráfico, desde 1975 aproximadamente, y con intensidad aún mayor desde 1984, año en el cual —como quedó dicho— comienza el divorcio entre mafiosos y funcionarios estatales.

Grosso modo, los siguientes son los hitos principales en el itinerario del sicariato como instrumento de sectores ricos emergentes:

1. Al principio, en la ya aludida forma del "Pistoloco", el sistema del sicariato se usa como sustituto de los sistemas institucionales de defensa, seguridad y justicia, en el interior de las organizaciones de narcotraficantes y en el conjunto de ese sector económico semiclandestino, pero igualmente con funciones económicas importantes, como: fijar precios de monopolio, intimidar a los competidores, asegurar los mercados, forzar ventas de bienes raíces; funciones útiles a los sistemas de los comerciantes en psicotrópicos, aunque ciertamente no sólo a esos comerciantes.

Para que este uso se extendiera, pese a ser un recurso ilegal, intervinieron condiciones institucionales favorables, a saber: el gran entronque de los mafiosos dentro de los organismos del Estado; desde fines de los años 70 era parte del argot cotidiano entre los funcionarios medios y bajos de los cuerpos de seguridad del Estado, la expresión "estar respaldado por un mágico (o mafioso)"; los narcotraficantes repartían "paladas" a diestra y siniestra, en cuantías que nunca antes se habían visto en la larga historia de corrupción administrativa que ha padecido el país. De ello se beneficiaban los sicarios contratados por los narcotraficantes, quienes gracias a sus padrinos nunca pasaban más de una horas en la cárcel; amén de las buenas relaciones que, por lo bajo, en sus barrios populares, mantenían los propios "pistolocos" con la policía.

2. Rápidamente el sicario pasó a ser contratado también para amedrentar a los jueces y funcionarios de investigación, hacia quienes los narcotraficantes combinaban la aplicación de una política simultánea de seducción y amenaza. Se pensó entonces en jóvenes de ciertos barrios de estratos medios con tradición de "malevos" como Aranjuez.

Por qué se prefirió a los jóvenes sobre los "malevos" de trayectoria, es algo que se puede indagar. Qué había de común entre las dos generaciones, en ese tipo de barrios, que los hiciera preferibles a otros barrios?

3. Ya aludimos a los dos giros en los que, desde 1984, se vio comprometido el gobierno de Belisario Betancur: por una parte la puesta en marcha de la "política de paz" con las guerrillas;

por otra parte el forzoso resquebrajamiento de las relaciones de convivencia y tolerancia entre el Estado y los capos del narcotráfico.

Ambos hechos serán de singular importancia para la evolución del comportamiento político de los narcotraficantes, y consecuentemente para la politización de sus sistemas, comerciales o corporativos (sicarios, grupos paramilitares) de poder y control, para la intersección, por ende, entre el crimen organizado de móviles lucrativos, y la violencia política (confluencia alcanzada por excelencia en la forma sicarial); a la vez, dicha evolución revertiría de contera sobre el tratamiento del gobierno a los narcotraficantes.

La politización a la cual acabo de hacer referencia, se desenvuelve, no obstante, en dos direcciones aparentemente contrarias y hasta contradictorias.

De una parte, frente a la “política de paz” y los nuevos espacios otorgados a la oposición, varios narcotraficantes anudan sus vínculos con sectores intransigentes de militares, hacendados y políticos, para exterminar todo brote de disidencia y de fuerza política contestataria; en esta dirección se hicieron famosos nombres como los de Rodríguez Gacha y Fidel Castaño.

De otra parte, frente al divorcio narcotraficantes-Estado, mediante el recurso a contratos con sicarios, aquéllos inician un forcejeo intimidando a algunos funcionarios, a la vez que convierten la deslegitimación de cara al poder institucional, en una mayor legitimación o adhesión de cara a los sectores populares, en barrios de donde justamente reclutarán ingente mano de obra para los contratos sicariales; la conversión de ilegitimidad oficial en legitimación popular fue posible, entre otros factores, por la precariedad del Estado, en un país en el que, como dice María Teresa Uribe, la legitimidad está completamente parcelada entre guerrillas, narcos, paramilitares, Estado.

En esta búsqueda de legitimidad y opinión para contrarrestar la pérdida del amparo oficial, los narcotraficantes han encontrado el gran obstáculo de los medios de comunicación y de las

agrupaciones políticas que, desde una perspectiva moral o de otra índole, han cuestionado sus actividades; por eso en esta etapa la persecución se ensaña contra diarios como *El Espectador* y movimientos políticos como el “Nuevo Liberalismo”. Aquí sobresaldría el nombre de Pablo Escobar, jefe máximo del cartel de Medellín.

4. A medida que, en medio de cierta ambigüedad siempre remanente, se endurece la posición del gobierno hacia el narcotráfico, especialmente en la administración del Presidente Barco, los narcotraficantes van radicalizando su lucha contra el gobierno, sin abandonar —paradójicamente— sus actos violentos contra los sectores contestatarios, realizados todavía en connubio con algunos miembros de los cuerpos oficiales armados¹⁵; este tipo de acciones, aunque consumadas a nombre de la conservación del viejo orden, también causaban, y posiblemente se propondrían, un efecto secundario de deterioro del gobierno y descrédito del Estado, en tanto evidenciaban la imposibilidad de la apertura al pluralismo político y la incapacidad del gobierno para cumplir el mandato constitucional de protección de la vida.

El último de los recursos de los narcotraficantes fue, sobre todo en el transcurso de 1990, el terrorismo, particularmente en la modalidad de carros-bomba accionados por sicarios. Sabemos que el terrorismo es una modalidad propia de la acción armada de confrontación al Estado en los medios urbanos modernos, como lo ha sido la guerra de guerrillas en medios predominantemente rurales, en donde cuenta más la demarcación y disputa territorial. Por medio de actos violentos dirigidos indiscriminadamente contra población civil anónima, sus autores buscan crear un sentimiento generalizado de pánico e inseguridad que lleve a la presión de amplios sectores, atemorizados, sobre el gobierno y demás instituciones oficiales para que cedan a favor de ellos.

Si ésta fue la estrategia de los narcotraficantes, hay que decir que tuvieron cierto éxito. En la

15. Cfr. el ya citado Informe del DAS al Presidente de la República, que publicó *El Tiempo* en su edición del 10 de abril de 1989 (p. 3A).

última campaña presidencial, casi fue lugar común entre los precandidatos y candidatos, la aceptación de la necesidad de negociar con los narcotraficantes y de eliminar su extradición hacia los Estados Unidos; los candidatos del partido tradicional de oposición, el conservador, agitaron esta bandera vehementemente, en particular el del sector "social-conservador", Rodrigo Lloreda. Todo eso abonó el terreno para la llamada "política de sometimiento a la justicia" que, una vez posesionado como Presidente César Gaviria, formuló y fue acogida por los máximos dirigentes del cartel de Medellín.

El efecto psicológico del terrorismo se combinó aquí con el sentimiento de rechazo a la injerencia norteamericana en una guerra que, dada efectivamente la política externa de los Estados Unidos de considerar el comercio latinoamericano de drogas como un problema de su propia seguridad, la mayoría de colombianos consideraba como una guerra ajena, impuesta y aparentemente imposible de ganar.

El problema del terrorismo se complica aun más al pensar que otros sectores diferentes del narcotráfico, bien sea los enemigos intransigentes de la negociación, bien sea sectores adversos al régimen por su política de reconciliación con la guerrilla, pueden haber recurrido al terrorismo, amparándose en la confusión engendrada por la pluralidad de "guerras" y en la rápida imputación que, de cualquier acto violento, hacían al cartel de Medellín, hasta hace muy poco, los organismos de seguridad.

III. ¿QUE SIGUE AHORA?

Todos nos preguntamos ¿ahora qué sigue?, con relación a las inquietudes de seguridad, no tanto del Estado cuanto del ciudadano raso. Y en este sentido, en verdad, los hechos presentes impiden ser ingenuamente optimistas. Aunque los gobernantes y los medios insisten en resaltar que la gente de Medellín ha recobrado la confianza, que la ciudad se ha normalizado, la vida nocturna reactivado, en la otra cara de la moneda las estadísticas de homicidios y lesiones personales, y los registros de denuncias contra funcionarios estatales en la Procuraduría por violación de derechos humanos o por actos delictivos, no son halagüeñas.

De las mismas consideraciones de este artículo se deduce que, ya obtenida la entrega de los capos del grupo de Medellín y desmantelado su dispositivo de terrorismo, subsisten importantes condiciones de violencia que provienen de la intensificación y expansión del fenómeno sicarial; fenómeno que, como vimos, tuvo su itinerario propio más allá del impulso organizacional que, en un momento dado, recibió del narcotráfico.

Ni siquiera está claro si, como en los inicios de la utilización del "pistoloco" por los narcotraficantes, los grandes capos sigan manteniendo incólume una parte de su aparato militar, de sus contratos sicariales, para el ajuste de cuentas interno, entre carteles y contra los "faltones". Que siguen siendo demandados estos servicios por una considerable capa de narcotraficantes medios y noveles, es un hecho. Que siguen funcionando las "oficinas" para atender las demandas de otros clientes diferentes a los traficantes de droga, también lo es.

No hay signos, por otra parte, de que se haya frenado la proliferación de sicarios independientes, de mayor o menor calado; antes, por el contrario, podría pensarse que, al quedar cesantes varios sicarios, pocos o muchos, de los vinculados al cartel, éstos se hayan visto precisados a rebuscarse por su cuenta aumentando de este modo la violencia callejera indiscriminada como contrapartida a la reducción de la violencia selectiva.

Además, para agravar el cuadro clínico, han surgido las "Milicias Populares"; aparentemente, ellas estarían devolviendo la paz a los habitantes de sus barrios controlados e impiéndiendo allí la acción de los sicarios; bajo esos supuestos, tienen de hecho el apoyo de gran parte del vecindario y cuentan con la financiación de los pequeños comerciantes; pretenden suplir las funciones de vigilancia y justicia que los cuerpos oficiales, por incapacidad y sobre todo —arguyen ellos— por contubernio con la delincuencia, no ejercen en los desprotegidos barrios nororientales.

La falacia es fácilmente diluyible si acudimos a la experiencia histórica colombiana: ésta, en efecto, nos muestra que casi todos los grupos violentos que se han sucedido desde 1949, se

han implantado inicialmente como protectores de la seguridad ciudadana, muchos de ellos abrogándose, a nombre de los inermes, el apelativo de "autodefensas"; es la historia de los múltiples grupos de "izquierda" y de "derecha", que han terminado, quién más quién menos, siendo gravosos para los lugareños por sus tributaciones y amenazantes para los derechos más elementales de sus mismos presuntos protegidos, y han engendrado siempre la "autodefensa" de signo contrario.

En el caso de las "Milicias Populares", nos parece que su discurso "revolucionario" (el de las Milicias "América Libre" es de ese tenor) las hace más peligrosas, por cuanto encubren el reprobable propósito de la "limpieza social" bajo el mesianismo político de su eslogan radical.

Entre tanto el problema del sicariato sigue sin resolver, porque los sicarios amonestados por las Milicias, optan por abandonar el barrio antes de ser exterminados y trasladar su actividad a otro lugar; incluso son alentados a ello por las Milicias, bajo una retórica peseudoclásica, de "buscar víctimas en las clases altas de la ciudad y dejar en paz a los hermanos de la misma clase".

El tratamiento policial, como se ha dado hasta el momento, tampoco ha mostrado resultados de reducción de la violencia ni de disminución del sicariato. En cambio ha suscitado, por sus métodos, un gran rechazo no sólo de los barrios más incriminados sino del resto de la ciudad; específicamente al Cuerpo Elite de la Policía se le ve en Medellín como un factor de violencia y no como un recurso de seguridad.

Sabemos que el Cuerpo Elite fue creado en la administración del Presidente Barco mediante el decreto 813 del 19 de abril de 1989, con el sano propósito de combatir los agentes de justicia privada como grupos paramilitares y bandas de sicarios. Sin embargo, lo que fue en principio un objetivo de acción policial, al inscribirse dentro de la guerra a muerte que existía entre gobierno y narcotráfico se convirtió más bien en una cruzada fanática que no ahorró artimañas de ninguna especie y que criminalizó a sectores enteros de la sociedad, como fue el caso de los jóvenes de las comunas

del nororiente de la ciudad. En la Procuraduría cursan varias investigaciones contra el Cuerpo Elite por violaciones de derechos humanos y por atropellos y robos en sus allanamientos; en torno de algunas masacres de jóvenes, sicarios o no, como la de Gómez-Plata, la taberna Oporto y la "gallada" de cinco muchachos del barrio El Estadio, existen denuncias, algunas de ellas públicas, contra el Cuerpo Elite y el F-2, en espera de que los juzgados o la Procuraduría según los casos, dictaminen si son responsables o no.

Por lo menos en un punto el planteamiento de la actual administración metropolitana frente al delicado problema del sicariato tiene razón, a saber en que el remedio no es el aumento del pie de fuerza ni las solas medidas represivas, que la única alternativa confiable es la vía civilista.

Desafortunadamente las iniciativas de la Alcaldía y de la Consejería Presidencial para Medellín, han sido recibidas con escepticismo y las acciones han sido estimadas exiguas, tanto por la población de los barrios a los cuales han ido destinadas como por el resto de los medellinenses.

Es cierto que cada sector y grupo social espera la solución del problema de acuerdo a sus intereses —por lo regular, muy legítimos—. Así, para los vecinos de los barrios nororientales y noroccidentales la solución fundamental al sicariato es la generación de empleo, que no se ve llegar, y en general la respuesta a la cantidad de necesidades barriales que el Estado ha sido remiso en resolver. Las acciones comunitarias insisten en los establecimientos para dispensación de servicios básicos, los centros recreativos y las vías. Los educadores consideran prioritaria para la reducción de la violencia, la atención a la enseñanza pública y al deporte. Y así sucesivamente.

Ya esto pone en un grueso dilema al gobierno metropolitano y nacional, porque la exigibilidad del fisco en uno y otro caso, así como la política global de orientación del gasto público, no les permite comprometerse a fondo o si se comprometen no les permite cumplir.

No obstante, nos parece que si hipotéticamente se pudiera responder a todas las demandas de los largos pliegos petitorios de los barrios, no con ello se extinguiría la violencia ni su modalidad del sicariato. Porque, junto a las variables económicas (comunes a otras ciudades colombianas, que no han visto crecer de igual forma esa modalidad de violencia), el proceso social de incubación del fenómeno nos ha mostrado otros elementos esenciales: como la excluyente estratificación de la ciudad en Medellín y el síndrome de desintegración producido por ese “cuasi-apartheid” entre el norte y el sur; como la obsolescencia de las propuestas integradoras de los viejos sectores dirigentes paternalistas; como la consolidación de los nuevos sistemas —los subterráneos— de movilidad social y los destellos del “dinero fácil”; como el peso del consumo y demanda del “servicio” sicarial por parte de todos los estratos sociales, y la negligencia de la justicia en investigar y sancionar a sus usuarios; como la injerencia del personal del propio Estado; como la histórica endeblez, entre nosotros, de una cultura del derecho real y no meramente formal, y el menosprecio por las vías de conciliación; como el escalamiento, en fin, en el medio social, de una nueva representación de la muerte del otro.

Las alternativas, por consiguiente, frente al fenómeno del sicariato, no pueden ser sino multilaterales, porque multivalente ha sido el proceso que lo ha modelado; en segundo lugar y por la misma razón, las alternativas no pueden sucumbir el inmediatismo, han de diseñarse a corto, mediano y largo plazo; deben ser, finalmente, concertadas: su impulso provenir de los sectores inermes y civilistas, pero en la concertación han de estar de alguna manera presentes todos los actores de violencia, los organizados y los dispersos, incluyendo las “Milicias Populares”.